

SECRETO PROFESIONAL E INFORMACION

Rafael de Asís Roig

Universidad Carlos III de Madrid.



INTENTAR adentrarse en el análisis del denominado “derecho al secreto profesional de los periodistas” plantea ciertas dificultades, derivadas algunas de la falta de desarrollo legal. Sin embargo, este vacío normativo puede ser aprovechado también desde un punto de vista teórico, ya que hace que el investigador posea unos márgenes de discrecionalidad amplios, sólo restringidos por los principios y normas que presiden nuestro Ordenamiento. En todo caso, conviene no olvidar el carácter normativo de la Constitución, en virtud del cual, el precepto constitucional en el que se contiene el secreto profesional es una norma y produce consecuencias jurídicas.

En este trabajo señalaré algunos problemas que acompañan a este supuesto derecho. Partiré de la relación entre el secreto profesional y la libertad de información, desde la que me referiré a tres cuestiones que, a mi juicio, describen el núcleo de la problemática que está detrás de esta figura: su configuración técnico-jurídica, sus titulares y sus límites.

El inicio de la investigación requiere algún concepto más o menos aceptado de lo que vamos a analizar. En este sentido, contamos con una definición del Consejo de Europa que, en 1974, identificó al secreto profesional como el “derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales”.

1. El secreto profesional y la libertad de información

Nuestra Constitución, en su artículo 20, 1, d), reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Asimismo, en ese punto afirma: “La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.” Como se observará, nuestra norma fundamental se refiere al secreto profesional, pero relacionándolo con el ejercicio de otro derecho: la libertad de información. En el análisis de la relación entre el secreto y la libertad de información aparecen los problemas más importantes que acompañan a esta figura.

En efecto, una interpretación literal y sistemática del precepto constitucional nos llevaría a la conclusión de que el bien jurídico que está detrás del secreto profesional no es otro que la libertad de información, lo que tiene importantes consecuencias. No hay que olvidar que esta libertad ha sido considerada por nuestro Tribunal Constitucional como preferente. Así, en su sentencia 165/87, de 27 de octubre, fundamento jurídico 10.º, destacaba que, “la libertad de información es, en términos constitucionales, un medio de formación de opinión pública en asuntos de interés general, cuyo valor de libertad preferente sobre otros derechos fundamentales... viene determinado por su condición de garantía de la opinión pública, que es una institución constitucional del Estado democrático que los poderes públicos tienen especial obligación de proteger”. Se trata así de una libertad que posee un valor cualificado en relación con las restantes, hasta el punto de que como el mismo Tribunal ha señalado, puede ser calificada como garantía institucional del sistema democrático¹.

¹ Garantía que posee un carácter objetivo, a través de la cual se protege un interés constitucional como es la formación y la existencia de una opinión pública libre, siendo en definitiva, la “condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático” (Sentencia 159/86, de 12 de julio, FJ 6.º).

La relación entre ambas figuras parece clara, pero de la misma no se deduce que no quepa hablar de libertad de información sin secreto profesional. Puede pensarse que el secreto posibilita una mejor realización de esa libertad, pero no cabe identificarlo con ella. Se trata más bien de un instrumento más para su realización. En este sentido, puede distinguirse en relación con el secreto, entre un bien jurídico protegido directo y otro indirecto. El directo sería el libre desarrollo de la actividad de los profesionales de la información; el indirecto, la libertad de información. La comprensión de estas dos perspectivas exigiría plantearse quiénes son los titulares de este derecho y frente a quiénes puede esgrimirse. No obstante, la distinción operaría en la configuración teórica de la figura. Independientemente de las dos perspectivas, el derecho al secreto profesional podría contemplarse como garantía de futuro para la libertad de información.

2. El secreto profesional: ¿derecho u obligación?

2.1. Algunas consideraciones iniciales

Tradicionalmente, la figura que estamos analizando se concibe como un derecho fundamental. El secreto reúne una de las notas definitorias de este tipo de derechos: la de la limitación del poder.

En efecto, el secreto profesional se constituye en un límite al poder que posee cuatro proyecciones:

- a) La del poder de cualquier persona privada, incluidos los órganos de dirección y organización del medio de comunicación.
- b) La del poder de la Administración Pública y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
- c) La del poder de las Comisiones de Investigación de las Cámaras.
- d) La del poder de los órganos judiciales.

Es en relación con el poder de los órganos judiciales donde el secreto profesional ha presentado su vertiente problemática. Podríamos incluso reducir más la cuestión y afirmar que, básicamente, el secreto se sitúa frente

al poder judicial y en materias de índole penal. Así, y de forma muy resumida, la cuestión ha sido descrita por algunos como un asunto de elección entre la libertad de información y el interés de la justicia en el esclarecimiento de los delitos. Ahora bien, aunque éste puede ser uno de los casos más problemáticos del secreto, su significado no puede reducirse a estos términos, y ello por varias razones. En primer lugar, porque ya hemos visto que el secreto se proyecta también en otros poderes y en ocasiones con una importancia no menor. En segundo lugar, la perspectiva que relaciona a esta figura con el poder judicial no se agota en el ámbito penal. En tercer lugar, incluso dentro de este ámbito, el secreto no tiene por qué tener como consecuencia el no esclarecimiento de los delitos. El secreto se refiere a la fuente y no a los hechos y, además, el profesional está obligado a demostrar siempre la veracidad de éstos.

No obstante, en lo que sigue tomaremos fundamentalmente como modelo de análisis la perspectiva del secreto que se sitúa frente al poder judicial, sin que esto deba hacernos olvidar las consideraciones efectuadas.

En este sentido, como acabamos de ver, el secreto se concibe como límite al Poder, pero esto no tiene por qué significar que estemos ante un derecho fundamental. Es más, en ocasiones, el secreto profesional aparece como expresión de una obligación de índole no ya moral sino jurídica.

Para ello, no hay más que volver a la distinción que se apuntó entre bien jurídico directo e indirecto. Desde el primer punto de vista, si el secreto profesional se relaciona con el desarrollo libre de la actividad informativa parece que la perspectiva del derecho es la que predomina. En cambio, si atendemos al bien jurídico indirecto, nos aparecerá la perspectiva obligacional. El secreto profesional sería así una obligación de todos los profesionales de la información para conseguir una mayor realización de esa libertad.

Parece que la primera perspectiva sería la más adecuada a la hora de entender esta figura. Tanto su relación, aunque no identificación, con otros tipos de secreto profesional reconocidos por nuestro Derecho cuanto la delimitación de su titularidad a uno sujetos determinados, los profesionales de la información, nos conducirían a esta solución. Por otro lado, confirmaría también esta perspectiva la idea de que a través de él lo que se protege es la labor del profesional y no su relación con el informador. Ciertamente, en este caso no hay necesidad del confidente cosa que sí ocurre en otros tipos de secreto.

Sin embargo, esto debe ser matizado atendiendo a la importancia de los profesionales y de los medios. El mismo Tribunal Constitucional en sus

distintos pronunciamientos sobre la libertad de información se ha referido a sus principales cauces destacando su importancia. Y esto tiene notables consecuencias en orden a la presencia en esta figura de la perspectiva obligacional. Si lo que se trata de defender es la libertad de información más que la libre actividad del profesional, no estamos en presencia sólo de un derecho sino de un derecho-obligación. El secreto se configuraría como una facultad del profesional que sería irrenunciable cuando estuviese en juego la libertad de información, y que desde esta perspectiva sólo podría limitarse cuando existiesen razones para limitar aquélla.

La dimensión obligacional se acrecienta si prestamos atención al valor que el secreto profesional tiene como garantía de futuro para la libertad de información. Puede argumentarse ante problemas concretos que el profesional de la información tiene la obligación jurídica de no desvelar las fuentes de su información cuando esté en juego la libertad de información. Y es precisamente en estos casos en los que el secreto adquiere una justificación mayor.

2.2. Los problemas del secreto como inmunidad

Sin embargo, tradicionalmente el secreto se ha presentado como expresión de un derecho. Desde esta perspectiva el secreto profesional no sería otra cosa que una inmunidad, y ello por los siguientes motivos:

a) Tiene unos titulares reducidos. Este derecho se predica exclusivamente de un determinado sector de la población a los que se confía una labor esencial dentro del sistema jurídico político. De esta importancia se deduce una excepción a ciertas obligaciones generales, que de ninguna manera pueden extenderse a todos los ciudadanos.

b) Si observamos el sentido que tiene el secreto profesional, veremos como básicamente despliega sus efectos frente a la potestad de los órganos judiciales. Hablo aquí de potestad porque parece ser éste el término oportuno para referirse al poder de esta institución como parte integrante de los poderes públicos. La figura correlativa a la potestad es la sujeción. Ahora bien, el secreto profesional se configura como una excepción a esta sujeción e implica por tanto su ausencia. En este sentido, el secreto profesional llevaría consigo la ausencia de competencia, falta de potestad o, con otras palabras, incompetencia del órgano judicial. Frente a la incompetencia se situaría la

figura de la inmunidad, por la que el secreto profesional poseería ese significado. El mismo razonamiento puede hacerse atendiendo no ya al poder judicial sino, por ejemplo, a la empresa informativa. Ciertamente cabría aquí hablar más bien de libertad y no de inmunidad, ya que podríamos entender que lo que posee la empresa es un derecho a exigir esa información al profesional. Sin embargo, si consideramos que la atribución de un derecho lleva aparejada la de ciertas competencias, volvería a aparecer la figura de la inmunidad como identificadora del secreto profesional.

En este sentido, el derecho al secreto operaría, por ejemplo, como una excepción a la obligación de auxilio a la justicia. No sería una conducta antijurídica porque el sujeto estaría obrando en el ejercicio legítimo de un derecho (art. 8.11 del Código Penal). Ahora bien, esta configuración del secreto problematiza enormemente esta figura, además de separarla en cierta medida de la libertad de información.

El hecho de ser una inmunidad exige que se defina, de forma precisa, su ámbito y extensión. Toda inmunidad o toda excepción al cumplimiento de una obligación general exige definir claramente su contenido. Esto no significa establecer límites a la institución, problema que analizaremos más adelante, sino intentar señalar de la manera más completa posible cuál es su significado. Como veremos, este problema afecta de manera directa a los titulares del secreto, pero despliega también su importancia en relación con su contenido.

Desde esta perspectiva se nos plantea un problema de difícil resolución y que presenta los caracteres propios de las aporías. Por un lado, puede afirmarse que un sistema democrático de Derecho no debe fomentar la existencia de inmunidades; por otro, parece que la libertad de información y los derechos que la acompañan son imprescindibles en el funcionamiento democrático de un sistema jurídico-político. En este sentido, y para no caer en la aporía, podría afirmarse que, al ser la libertad de información una condición estructural del sistema, se situaría en todo caso por encima de las inmunidades. Así, éstas estarían justificadas siempre y cuando favoreciesen de manera objetiva esta libertad. Ahora bien, esto exige delimitar con claridad estas situaciones y sus titulares.

En este sentido, puede afirmarse que el secreto como inmunidad adquiriría sentido en relación con la libertad de información. Cuando analizamos el bien jurídico que está detrás del secreto profesional, si bien apuntábamos la posibilidad de distinguir entre bien directo e indirecto, destacábamos por encima de esa distinción a la libertad de información. Esta inmunidad está justificada como protección a la libertad de información, por lo que será en

relación con ésta cuando presente su dimensión jurídica fuerte. Ahora bien, si se justifica la inmunidad en el valor de la libertad de información, habría que plantearse si no es más bien una obligación del profesional. La vinculación con la libertad de información de una forma directa nos llevaría a impedir que la decisión sobre su protección se dejase al arbitrio del profesional, que es lo que ocurre si se subraya la dimensión del secreto como inmunidad². Así, el secreto se configura como una obligación cuando está relacionado con la libertad de información, mientras que la perspectiva de la inmunidad incide más en el desarrollo de la labor del profesional, aunque se afirme que con ella de manera indirecta se protege también a la libertad de información. Ciertamente, tal vez sea la unión de las dos concepciones en la figura del derecho-obligación, la que mejor permita entender al secreto.

La relación del secreto-inmunidad con la libertad de información es más problemática que la que se produce desde la perspectiva del secreto-obligación. Por otro lado, en esta última dimensión pueden integrarse sin dificultad las características que tradicionalmente han servido para delimitar el sentido de la figura.

Así, desde esta perspectiva puede seguir manteniéndose que el secreto abarca sólo aquellas situaciones en las que el papel del profesional es el de actuar como testigo y nunca como responsable, en el sentido de que la información ha sido proporcionada por un tercero. Esto se refiere tanto a su intervención en procesos judiciales como desde la perspectiva de sus relaciones con la empresa u otros poderes. El secreto profesional no afecta al profesional de la información cuando es él el responsable de ésta. Es decir, en este caso la obligación del secreto decaería y se impondría la obligación general de auxilio a la justicia.

Igualmente, puede integrarse más cómodamente, en la dimensión del secreto-obligación, el alcance tradicional que se ha dado a la figura. En este sentido se suele afirmar que el secreto afecta sólo a la fuente de información y no a los hechos. Así, el secreto podrá fundamentar la negativa de comunicar la fuente de información, pero no los hechos que constituyen la información. Si se mantuviese la perspectiva de la inmunidad, podría pensarse que se está protegiendo la labor del profesional, con lo que esta matización en el alcance no estaría del todo justificada, cosa que no ocurre si se vincula el secreto directamente con la libertad de información.

² En efecto, como inmunidad, el profesional podría decidir cuando descubre su fuente y cuando no, sin limitación alguna.

Idénticas consideraciones pueden ser efectuadas respecto a la relación del secreto con otras obligaciones a la que no afecta, tales como la de acudir al llamamiento judicial y de declarar, la de veracidad y la de entrega de los instrumentos que constituyen el cuerpo del delito.

2.3. Los problemas de la consideración del secreto como derecho fundamental

Pero no sólo aparecen problemas desde la concepción del secreto como inmunidad, sino también en su consideración como derecho fundamental. Al comienzo de este apartado hicimos ya una breve referencia a este tema. Como veremos a continuación, el secreto-obligación permitiría solventar los problemas que acompañan a esa caracterización sin variar la protección del bien que se encuentra detrás.

En esta temática habrá que estar al significado constitucional de la figura y a su consideración jurisprudencial. Sin embargo, cobran aquí importancia los rasgos que, desde la teoría general de los derechos, se describen como propios de éstos. En este sentido, es quizá el dato de que este derecho se constituya en una inmunidad el que más problemas puede presentar a la hora de integrar el derecho en la categoría genérica de los derechos fundamentales.

En efecto, estamos en presencia de un derecho cuyos titulares no son todos los ciudadanos sino un sector determinado, una clase profesional. Faltaría así la nota de la universalidad que ha ido proclamada por algunos como uno de los caracteres esenciales de los derechos. Sin embargo, como apuntaré, la universalidad no parece ser una nota esencial de los mismos. Pero ahora bien, aunque eso sea así, habrá que justificar su falta en figuras que constituyen básicamente una inmunidad. Y es aquí donde surgen los problemas más importantes en la consideración de este derecho como fundamental.

En este sentido, cabría en primer lugar relacionar el derecho con la libertad de información. Su nota de fundamental vendría derivada de esta relación y de la importancia de aquella libertad para el desarrollo del sistema jurídico-político. Sin embargo, podría afirmarse, como señalamos cuando analizamos en bien jurídico, que la vinculación del secreto profesional, como inmunidad, con la libertad de información es indirecta y no necesaria. Es decir, desde determinados planteamientos podría llevarse a cabo la siguiente argumentación. A pesar de que detrás del ejercicio de este derecho se en-

cuentre esta libertad, ésta puede producirse sin que el derecho se esgrima y, lo que es aún más relevante, cabe que el titular no haga uso del secreto profesional ya que, se trata de una inmunidad y no de una obligación. Es importante advertir que estoy hablando de posibilidad de renunciar al ejercicio y no a la titularidad. En la figura de las inmunidades está presente la idea de libertad en el sentido de que su titular puede libremente no hacer uso de la inmunidad, sin que ello suponga obviamente la desaparición del derecho. Igual que la libertad supone la ausencia de derechos en otros para obligarme a hacer o dejar de hacer algo, la inmunidad significa la ausencia de potestad en otros para obligarme a hacer algo. Ahora bien, quien tiene una libertad o una inmunidad puede hacer ese algo.

Si existiese una vinculación directa entre el derecho y la libertad de información, dada la importancia que tiene ésta en nuestro Ordenamiento, no cabría la posibilidad de que el titular del derecho al secreto pudiese renunciar a su ejercicio. Es decir, si existiese una conexión necesaria, la renuncia del derecho al secreto llevaría consigo la transgresión de la libertad de información³.

Siguiendo con el razonamiento, podría también argumentarse que el derecho encuentra su acomodo en la protección de la labor de los profesionales de la información. Se trataría así de un reconocimiento especial a un determinado sector profesional. Las razones de este reconocimiento habría que encontrarlas en el papel que juegan estos profesionales dentro del Estado y su importancia en los sistemas democráticos.

Como se observará, desde esta configuración parece que estamos ante un derecho cuya misma conceptualización va acompañada de una serie de límites. Pero centrándonos en su carácter de derecho fundamental parecería a primera vista que desde el plano teórico, moviéndose exclusivamente en estos planteamientos, estaríamos en presencia de un derecho con unos titulares determinados pero de difícil catalogación como derecho fundamental.

De esta forma, parece conveniente analizar el sentido y la regulación jurídica de esta figura en nuestra Constitución, donde con carácter general, la consideración de un derecho como fundamental viene determinada por las garantías que se establecen para su ejercicio y protección.

Sabemos ya que nuestra Constitución se refiere al secreto profesional en su artículo 20, y que lo hace, en relación al ejercicio de la libertad de información. Esto obliga a realizar algunas consideraciones.

³ Llama la atención como algunos profesionales de la información, al ser condenados por una información no veraz, se olvidan del secreto profesional, y sin ningún tipo de problemas, aluden a sus informadores con nombres y apellidos.

La primera se centra en la simple alusión a este derecho dentro de la sección primera del capítulo II, del título primero de la Constitución. Así, un razonamiento *sedes materia* podría llevar a afirmar el carácter fundamental de este derecho. A esto podría objetarse que en relación con otros derechos también enunciados en ese título, aunque eso sí en otra sección, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que no se trata de derechos fundamentales. A pesar de ello, el derecho al secreto profesional podría entenderse como derecho instrumental necesario de la libertad de información y del desarrollo libre de la profesión informativa.

En este sentido, la segunda de las consideraciones se relaciona con la necesidad de determinar cuándo se alude al secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información y cuándo no. Es decir, cuándo se sitúa como esencial para la libertad de información, ya que sólo en estos casos se convertiría en un supuesto derecho fundamental. Ahora bien, esto nos conduce a dos consideraciones. En primer lugar, no es posible determinar la relación desde el principio, sino que tendrá que solucionarse desde los problemas concretos. Sólo será posible señalar un serie de casos en los que, con carácter general, no sería esgrimible o más bien no existiría. Pero es que, en segundo lugar, cuando el secreto es esencial para la libertad de información se presenta no ya como un derecho sino como una obligación.

La relación entre la libertad de información y el secreto profesional hace que éste, para su ejercicio, presuponga siempre a aquélla, por lo que deberá gozar de sus características y límites. Esto puede verse claramente atendiendo al requisito de veracidad que acompaña a la libertad de información. En relación con ésta, el secreto profesional no faculta al profesional a realizar una declaración judicial que altere la verdad con el propósito de no desvelar la fuente. Estaríamos en este caso en presencia de un delito de falso testimonio del artículo 332 del Código Penal. Igualmente, tampoco podrá transmitirse una información no veraz con el objetivo de silenciar la fuente, ya que se estaría desvirtuando el valor constitucional de la libertad de información.

Las consideraciones anteriores vuelven a recalcar la existencia de una perspectiva obligacional en la figura del secreto, desde la que los diferentes problemas adquieren una visión menos conflictiva. Eso sí, podría entenderse que aun con una perspectiva obligacional y, dentro de ella, aparecen también ciertas notas que relacionan al secreto con el ejercicio de un derecho, siempre teniendo en cuenta la libertad de información. En este sentido, se trataría de un derecho gradual en el sentido de que su fuerza vendría determinada en

cada caso concreto. Este derecho tendría un carácter fundamental y adquiriría su fuerza mayor cuando fuese determinante de la efectividad de la libertad de información.

La relación secreto-libertad de información y la dimensión de derecho que posee esta figura hace que deba gozar de la protección que para el ejercicio de la libertad de información se recoge en nuestro Ordenamiento. En este sentido, no sería paradójico afirmar que a pesar de que en el mismo prime la perspectiva obligacional, su relación con la libertad de información y su proyección frente a determinadas obligaciones hace que su desarrollo deba hacerse por Ley Orgánica y haga al secreto susceptible de protección en amparo.

En definitiva, tal vez sea la figura del derecho-obligación la que sirva en mayor medida para definir el sentido del secreto profesional. Ciertamente, atendiendo a su justificación, como hemos visto, parece que prima la segunda, pero a la hora de plantearse situaciones de garantía ante incidencias de poderes, cobra sentido la perspectiva del derecho. Incluso, podría afirmarse que el secreto se presenta como una obligación desde el punto de vista de su titular, si bien, cuando se pretende por parte de otros que se revele ese secreto contra la voluntad del titular aparece como derecho en el sentido de inmunidad.

2.4. Algunas conclusiones

Como hemos tenido ocasión de señalar el secreto profesional posee dos perspectivas: la que se acerca al sentido de un derecho y la que se acerca al de una obligación. En relación con la primera, el secreto se situaría frente a una obligación legal, mientras que en el segundo caso sería expresión o concreción de un derecho fundamental. Entre estas dos perspectivas primaría la segunda ya que la justificación de la primera nos traslada irremediabilmente al derecho de la que la segunda es concreción, es decir, a la libertad de información.

Esta misma conclusión surge del análisis de los titulares del secreto, que realizaremos a continuación. Ahora bien, conviene no pasar por alto que la concepción del secreto como obligación presenta ciertos problemas. Tal vez el principal derive también de su conexión con la libertad de información. En efecto, la importancia de ésta para el sistema jurídico político puede proyectarse no sólo en los contenidos de informaciones sino también en sus fuentes.

Obligar en todo caso al profesional a silenciarla puede chocar con este interés. Una configuración del secreto como derecho-obligación solventaría, al menos desde el plano teórico, estos problemas.

3. Los titulares del secreto profesional

La determinación de los titulares del secreto varía ciertamente según se adopte una u otra perspectiva de las anteriormente señaladas. Desde la consideración del secreto como obligación podría pensarse que sus titulares fuesen todos los ciudadanos, mientras que tal vez esto no sería predicable si nos fijásemos en la consideración del secreto como derecho. El análisis del secreto desde un punto de vista tradicional, es decir, como derecho, puede aportar cierta luz en este tema.

3.1. Los titulares del secreto desde su relación con la libertad de información

Hay quienes consideran, desde lo que podríamos denominar como “Teoría General de los derechos fundamentales”, que éstos se caracterizan por la universalidad. Se trataría así de derechos que pertenecen a todos los ciudadanos sin distinción. Sin embargo, no parece ser ésta una característica de todos los derechos. Desde el punto de vista de la titularidad, dentro de este capítulo de nuestra Constitución, existen derechos que sólo tienen como titulares a determinados sujetos. Desde el punto de vista de los sujetos obligados, la universalidad tampoco parece ser una característica común a los mismos.

Puede sostenerse que los derechos donde parece faltar la universalidad son derechos específicos o del hombre situado. Así, existiría una universalidad dentro del grupo afectado. Por ejemplo, en el caso del secreto, no estaríamos en presencia de un privilegio otorgado a ciertos grupos de profesionales sino a todos los profesionales. Desde esta perspectiva de la universalidad, sí que sería posible señalarla como característica de los derechos.

Ahora bien, el secreto profesional, en el articulado constitucional, se encuentra en relación con el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Una interpretación literal de esta norma nos conduciría a afirmar que la libertad de información es un

derecho que tienen no sólo los profesionales de la información sino todos los ciudadanos en general, tanto en su sentido pasivo (recibir información), como activo (difusión de información).

Sobre quiénes son los titulares de esta libertad, el Tribunal Constitucional se ha expresado en numerosas ocasiones, en la línea de hacer corresponder la titularidad del derecho a la generalidad⁴. Ahora bien, como también ha señalado este Tribunal, el ejercicio de este derecho por el profesional de la información aumenta su valor. Así, en su sentencia de 16 de marzo de 1981, fundamento jurídico 4.º, señaló que el derecho a comunicar sirve en la práctica sobre todo de salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y difusión de la información su profesión específica. Este aumento de valor no es resultado de una configuración de estos profesionales como grupo privilegiado. El Tribunal Constitucional lo dejó claro en relación con un problema sobre la asistencia a un juicio de los medios de comunicación social, afirmando, en el fundamento 4.º de la sentencia 30/82, que no se trata de un privilegio gracioso y discrecional, sino un derecho preferente en virtud de la función que cumplen. En este sentido, la mayor fuerza de la libertad de información cuando es ejercida por los profesionales de la información estaría apoyada en la idea de que es a través de ellos como esa información trasciende y cumple con mayor efectividad su función⁵. Cobra especial relieve aquí la idea de la especificación a la que hicimos alusión antes.

Teniendo en cuenta estas afirmaciones sobre la libertad de información, ¿cabría extenderlas al secreto profesional? En principio, la contestación tendría que ser afirmativa. Imaginemos el caso de un ciudadano, no profesional, que informa sobre determinado suceso realizado por otra persona o institu-

⁴ Así, en su sentencia 6/88, de 21 de enero, dentro del fundamento jurídico 5.º, se afirma que la libertad de información pertenece a todo el mundo, "aunque no fuera más que porque el proceso en que la comunicación consiste no siempre podrá iniciarse mediante el acceso directo del profesional del periodismo al hecho noticiable mismo". En idéntico sentido se había expresado ya en su sentencia 105/83, de 23 de noviembre, dentro del fundamento jurídico 11, afirmando que "de él es sujeto primero la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho, del que es asimismo sujeto, órgano o instrumento el profesional del periodismo...". El significado de garantía institucional, que posee este derecho, como ha sido afirmado por la jurisprudencia constitucional, conduce también a esa consideración de los titulares de la libertad de información. Son todos los ciudadanos porque se trata de un derecho que hace posible una vida democrática más real.

⁵ Esta parece ser la posición del Tribunal Constitucional mantenida en su sentencia 167/87, dentro del fundamento jurídico 10: "Este valor preferente alcanza su nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información... Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad no deba ser reconocida en iguales términos a quienes no ostentan igual calidad profesional... pero sí significa que el valor preferente de la libertad declina cuando su ejercicio no se realiza por los cauces normales de formación de la opinión pública..."

ción relacionado con un delito, y que, requerido por el juez, se negara a desvelar la fuente de su información. ¿Podría invocar el secreto profesional? Como acabamos de afirmar, desde la interpretación que hemos realizado de la libertad de información, no habría por qué contestar en sentido negativo.

Sin embargo, si profundizamos más en el sentido del secreto, nuestra respuesta cambiará. Para ello no hay más que ampliar la reflexión a tres consideraciones, la mayoría de las cuales serán o han sido analizadas en otros puntos, pero que conviene apuntar o recordar:

a) El valor de los profesionales de la información y del secreto profesional en nuestro Ordenamiento, como por otro lado en todos los sistemas democráticos, se deduce del papel que en relación con ellos desempeña la libertad de información.

b) La misma denominación del secreto obliga a delimitar su campo. Se trata del secreto profesional, y por lo tanto, de un derecho que se proyecta en una determinada profesión.

c) La configuración y el significado que tiene el secreto desde la dimensión que lo concibe como derecho, tanto en la legislación como en la jurisprudencia comparada, es la de consistir en una inmunidad. Desde estas perspectivas su titularidad es reducida. Esto puede chocar con la sentencia antes citada del Tribunal Constitucional que, refiriéndose a la libertad de información de los profesionales, como sentido preferente de ésta, señalaba que no se trataba de un privilegio gracioso y discrecional. Sin embargo, entender el secreto como una inmunidad, o como una obligación con titulares reducidos, no significa concebirlo como un privilegio gracioso o discrecional ni como una imposición arbitraria y discriminatoria. La reflexión sobre la especificación apoya este razonamiento.

En resumen, a pesar de la relación secreto profesional-libertad de información, no parece que pueda afirmarse que ambos poseen los mismos titulares. El secreto profesional se establece como uno de los posibles elementos de la libertad de información pero no agota su significado.

Frente a este planteamiento, estaría el de aquellos que considerarían como titulares a toda la colectividad aduciendo que se trata de una garantía institucional no sólo de la prensa sino de la información como tal. Sin embargo una cosa no lleva a la otra. Ciertamente, a través del secreto se protege la libertad de información y, por lo tanto, un derecho de todos, pero su ejercicio —el del secreto— puede estar reconocido de manera específica a un determinado sector. Lo mismo puede decirse desde la consideración del secreto como obligación, ya que en esta perspectiva se trata también de una

obligación que se sitúa frente a otra y que dado su carácter especial sólo afecta a un determinado sector.

Parece así necesario no confundir entre los titulares del derecho a la información, para lo que no es necesario ningún tipo de requisito⁶, y los del secreto profesional, tanto en su perspectiva de derecho como en la de obligación. Por otro lado, no sólo la alusión que se hace en el artículo 20 de la Constitución, sino las continuas referencias del Tribunal Constitucional a los profesionales de la información, apoyan este razonamiento. Y también lo apoyan algunas decisiones del Tribunal Supremo. Por ejemplo, cuando este Tribunal ha tratado el problema de la veracidad de la información ha hecho referencia a la nota de la profesionalidad, en el sentido de que es posible hablar de ella respecto a la información. Es el caso de la sentencia de 20 de diciembre de 1990 (Ref. *Aranzadi* 9668), en cuyo fundamento jurídico 3.º se afirma: "Si el transmisor de la información errónea ha cumplido con el deber que le incumbe de comprobar la veracidad de la noticia, con la diligencia exigible en el caso concreto teniendo como medida al respecto el comportamiento que un profesional adopta ordinariamente en casos semejantes..." Si es posible hablar de la profesionalidad, es a ella a la que se refiere el secreto profesional. Es decir, estamos en presencia de una figura que afecta sólo a ese profesional al que en la sentencia anterior se refería el Tribunal Supremo.

En este sentido, parece que el secreto posee unos titulares concretos que son los profesionales de la información. Ahora bien, en este punto aparece otro problema, que en cierta forma se relaciona con las consideraciones anteriores. ¿A quiénes nos estamos refiriendo cuando decimos "profesionales de la información"?

3.2. El concepto de profesional de la información a los efectos del secreto

Dos consideraciones merecen ser tenidas en cuenta. Por un lado, hay que ser conscientes de que la conceptualización de este término presenta una proyección o dimensión de interés público. Por otro lado, conviene tener presente que el secreto profesional está relacionado con la libertad de información y no con la libertad de expresión, lo que obliga a no encuadrar dentro de su ámbito a aquellos que no se dediquen a informar.

⁶ El Tribunal Constitucional en su sentencia 30/82 señaló que el derecho a la información no depende de la acreditación.

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España señaló una concepción del profesional de la información, destacando los requisitos que habrían de poseerse para ser considerado como tal. En este sentido se afirma que deberán ser reconocidos como tales:

- a) Los profesionales titulados por las antiguas Escuelas de Periodismo o por las Facultades de Ciencias de la Información.
- b) Quienes hayan cursado una carrera universitaria y acrediten un ejercicio profesional periodístico durante dos años ininterrumpidos.
- c) Los que acrediten un ejercicio profesional periodístico durante cinco años ininterrumpidos independientemente de que ostenten alguna titulación⁷.

En relación con estas consideraciones de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, parece que los requisitos que se enumeran pueden servir como orientación en la determinación de quiénes son profesionales de la información con carácter general. Sin embargo, respecto a una figura concreta, como es el secreto profesional, deberá concretarse igualmente esta proyección a las situaciones y circunstancias precisas en las que éste se ve implicado.

En el Derecho comparado no cabe hablar de una regulación uniforme de este problema. Sin embargo, sí que puede, de manera general, afirmarse que existen dos modalidades de determinación. Por un lado, aquellos que exigen cierta titulación acompañada del desempeño de determinadas tareas durante un período de tiempo. Por otro, los que no exigen ningún tipo de acreditación y se apoyan en la figura del contrato entre el profesional y el medio de comunicación.

En las distintas proposiciones de regulación legal del derecho al secreto profesional dentro de nuestro país, también se han explicitado concepciones del profesional de la información. Citaremos dos. En la proposición de ley del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social de 19 de abril de 1988⁸, se entendía por tales, "quienes obtienen información sobre hechos, asuntos o materias de interés social para ser comunicada, pública o periódicamente, en forma escrita, oral o gráfica mediante su difusión impresa, radiada, televisada, cinematográfica o por cualquier técnica similar, y desarrollar su tarea en un medio de comunicación como trabajo habitual principal y

⁷ Vid. M. CARRILLO: *La clàusula de consciencia i el secret professional dels periodistes*, Barcelona, 1992, p. 61.

⁸ Publicada en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, III Legislatura, serie B, núm. 109-1, de 21 de abril de 1988.

retribuido, mediante relación autónoma o de dependencia". Por su parte, la proposición de ley de Izquierda Unida de noviembre de 1988⁹, afirmaba que el derecho correspondía a "los profesionales que como trabajo principal y retribuido se dedican a obtener y elaborar información para difundirla o comunicarla públicamente por cualquier medio de comunicación técnica".

En la tarea de alcanzar un concepto preciso de los profesionales de la información a los efectos del secreto, podemos apoyarnos también en la legislación laboral. Desde esta órbita, una primera aproximación nos vendría dada por el artículo 1,1 del Estatuto de los Trabajadores. En él se hace referencia a los trabajadores por cuenta ajena como aquellos "que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleados o empresarios". Como se verá, se hace aquí alusión al trabajo por cuenta ajena. En este sentido, la disposición final primera del Estatuto de los Trabajadores es tajante al afirmar: "El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por precepto legal se disponga expresamente."

Reducir la titularidad del secreto profesional a los trabajadores por cuenta ajena podría ser, para algunos, una restricción excesiva. Dejar en manos de la Administración Pública la determinación de cuándo estamos en presencia de un profesional de la información puede ser contrario a las características del bien jurídico que se sitúa detrás, pero esto mismo puede afirmarse si es la empresa informativa de la que depende esta consideración. Y esto es lo que ocurriría si únicamente nos fijásemos en la realización de un contrato con una empresa para calificar a un individuo como profesional de la información. Sin embargo, hay que ser conscientes que en la libertad de información juegan un papel singular los medios de comunicación. Es a través de ellos donde esta libertad adquiere su valor preferente y, en este sentido, apartarse de esta realidad supone negar lo evidente. Desde esta perspectiva no quedaría más remedio que contemplar la labor de los profesionales de la información integrada en estos medios, subrayando al mismo tiempo el valor de su independencia a través de la regulación de la cláusula de conciencia. Por otro lado, no puede dejar de considerarse que la realización del contrato de trabajo es un suceso anterior a la información por lo que no afectaría básicamente a la libertad de información.

⁹ Publicada en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, III Legislatura, serie B, núm. 132.1, de 18 de noviembre de 1988.

Algunos ejemplos, que se fijan en la dimensión del secreto como derecho, pueden aclarar aún más este problema.

Podría ocurrir que un individuo hubiese obtenido una determinada información y que entendiese necesaria su publicidad. En este caso, el sujeto podría o bien pasar la información a un profesional con el compromiso de hacerla pública, o bien convertirse él en informador directamente. En este segundo supuesto sólo si se hubiese establecido un contrato entre el medio y el sujeto cabría hablar de la posibilidad de aducir, en algún momento, el secreto profesional. Alguien podría pensar que de esta manera se está limitando la libertad de información. No obstante, los sujetos tienen la posibilidad de hacer pública su información. Los únicos problemas que pueden devenir vendría de la negativa de los medios a informar; de ahí la necesidad de su pluralidad. Por otro lado, que sea el profesional quien puede apoyarse en el secreto no es más que una garantía de su realización precisa y no afectaría al bien jurídico. Por último, puede aducirse también que en relación con este ejemplo, un ejercicio esporádico no está protegido porque no va a intentar en el futuro obtener otras informaciones de fuentes que deba reservar o, al menos, no se prevé que así sea.

Podría ocurrir también que un individuo, no consiguiese un contrato en ningún medio de comunicación y por lo tanto no pudiese pasar a ser profesional de la información. Aquí, independientemente de los problemas que afectan a otros derechos, en relación con la libertad de información el sujeto podría constituirse en informador de un profesional e incluso, desde esta perspectiva, el secreto protegería su identidad. Se presenta de nuevo la perspectiva obligacional, en el sentido de que en este caso, el profesional deberá guardar en secreto la identidad del informador, ya que seguramente, de otra forma no habría posibilidad de acceder a ella.

Igualmente, podría darse la situación de que el profesional, trabajador de la empresa informativa, se viese impedido por ésta a transmitir cierta información. En este caso, el profesional podría actuar como se describe en el primer ejemplo, es decir, dando esta información a otro profesional. Sin embargo, no parece que esté solucionando el problema. Ciertamente con ella la información se transmitiría pero no existiría un desarrollo libre en la actividad del profesional. En este sentido, respecto a este supuesto, parecería necesario proteger y defender, por un lado, los derechos de los profesionales frente al poder de su propia empresa, y por otro, de nuevo, la existencia de pluralismo en los medios. Otra figura sin desarrollo legal como es la cláusula de conciencia entraría en juego.

Podría presentarse otro problema relacionado con la titularidad. Respecto al ejercicio de la libertad de información, es posible hablar de profesionales autónomos. Se trata de aquellos que no tienen una relación jurídica permanente, sino que se dedican a “vender” su información. Dentro de ellos puede incluirse también a los denominados “colaboradores”. En relación con la forma de concebirlos hay dos posibilidades. La primera consiste en entenderlos como simples informadores. Desde esta perspectiva el “autónomo” para transmitir la información tendría que ponerse en contacto con un profesional y ser además éste el que informase por el medio. La segunda, entender que con la “venta” de información se está produciendo un contrato, con lo que el sujeto se integraría en el concepto que manejamos.

Puede parecer que esta forma de concebir al profesional de la información sea excesivamente restrictiva, sin embargo, el significado del secreto exige definir de manera precisa quiénes son sus titulares.

En este sentido, es posible perfilar más este concepto. Un referente normativo podría ser el que se contiene en el Real Decreto 1006/85, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. En esta norma se hace alusión al carácter profesional del trabajador. Así, en el artículo 1,2 de este Real Decreto se afirma:

“Son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución.

Quedan excluidos del ámbito de esta norma quienes se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva.”

Teniendo en cuenta esta disposición, cabría entender por profesional de la información quien, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dedique voluntariamente al ejercicio de la información por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa o sociedad (de un medio de comunicación), a cambio de una retribución. A esto se podría objetar que la información no está relacionada con el lucro sino con el interés público. Ahora bien, la nota de la profesionalidad que acompaña al secreto puede contrarrestar ese argumento.

Sólo podríamos abrir un poco más este concepto desde las consideraciones antes efectuadas señalando que no sería necesario que la relación establecida con carácter general lo fuese dentro de la misma empresa, sociedad o medio. Así, sería titular del secreto y, por tanto profesional de la información a sus efectos, quien en virtud de una relación contractual con

un medio de comunicación se dedicase al ejercicio de la información a cambio de una retribución.

Nótese, sin embargo, que esta perspectiva se apartaría de las regulaciones que en nuestro país se están llevando a cabo respecto a actividades laborales especiales. Hemos visto ya un ejemplo en relación con los deportistas profesionales, pero puede citarse también la regulación de la relación laboral de los artistas. En este sentido, el Real Decreto 1435/85, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, se refiere a éstos, en su artículo 1,2 y señala que serán considerados como artistas: "... quienes se dediquen voluntariamente a la prestación de una actividad artística por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de aquéllos —se está refiriendo a los organizadores de espectáculos o empresarios—, a cambio de una retribución." Como puede observarse, esta regulación apoyaría nuestra primera definición de los profesionales de la información.

Puede pensarse que, con el objetivo de no vincular la consideración de profesional de la información al medio, sería preferible apoyarse en los requisitos que aludimos al hacer referencia a la proposición de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Sin embargo, éstos presumen el concepto de ejercicio profesional, por lo que parece que tendrían que someterse a alguna de las definiciones que aquí se proponen. De esta forma, operando conjuntamente con nuestras definiciones y con los requisitos de esta Federación, no se haría otra cosa que restringir aún más la concepción de profesional de la información.

4. Alcance o límites del secreto

Normalmente, en los diferentes estudios sobre el secreto profesional, uno de los problemas que poseen más relevancia es el de los límites. Antes de entrar en su análisis parece necesario advertir que, desde los planteamientos que estamos siguiendo, esta cuestión permite un enfoque distinto del tradicional. En efecto, si se considera al secreto como un derecho, el problema en cuestión afecta a sus límites, pero si se prima la perspectiva obligacional, no se estará haciendo referencia a los límites sino más bien al alcance de la obligación. Ciertamente, el problema real no varía en una u otra dimensión, pero sí que parece necesario tener en cuenta este matiz. En este sentido, en lo que sigue partiremos de nuevo desde la dimensión tradicional, esto es la de derecho.

Comenzaré recordando la vinculación de nuestra figura con la libertad de información. Hay numerosa jurisprudencia Constitucional y del Supremo que incide sobre cómo deben entenderse los límites de esta libertad así como su valor. Pueden ser citadas desde decisiones como la Sentencia del Tribunal Constitucional 105/83, de 23 de noviembre, donde en el fundamento jurídico número 11 se afirma con carácter general que la lesión directa de esta libertad “se produce en todos aquellos casos en que tal comportamiento —los actos de comunicación o de difusión— se ven impedidos...”; hasta la del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 1990 (Ref. *Aranzadi* 1708), donde, recogiendo doctrina del Constitucional (expresada en su sentencia de 159/86, de 12 de diciembre), se afirma, además de que cualquier límite a este derecho debe ser menor que los de los demás, que “el derecho de un profesional del periodismo a informar, así como el de sus lectores a recibir información íntegra y veraz, constituye, en último término, una garantía institucional de carácter objetivo, cuya efectividad exige en principio excluir la voluntad delictiva de quien se limita a transmitir, sin más, información, aunque ésta, por su contenido, pueda revestir significado penal”. Estas consideraciones jurisprudenciales afectan tanto a la vertiente obligacional como a la que presenta el secreto como un derecho.

Siendo así básicamente el análisis de los límites una indagación sobre qué figura tiene más fuerza en casos de conflicto, esto es, entre dos instituciones enfrentadas cuál debe prevalecer con carácter general, puede afirmarse que la prevalencia o no del secreto profesional dependerá de la libertad de información. De esta forma, los límites que se establezcan al secreto profesional, dada su relación con la libertad de información, deberán ser exactos y precisos.

En algunos de los límites que señalaremos a continuación, puede decirse que con carácter general la figura del secreto adquiere menos fuerza, mientras que en otras ocasiones habrá que analizar en el caso concreto su fuerza. Es decir, hay casos en los que los límites pertenecen de alguna manera al propio sentido de la institución, mientras que en otros casos se trata de dar algunos criterios frente a los que el secreto puede, pero no necesariamente debe, decaer.

Con carácter general el secreto profesional no puede esgrimirse para encubrir conductas ilegales. Sin embargo este criterio tan general parece insuficiente ya que, básicamente, la señalización de estas conductas es algo que, salvo determinados casos, se hace después del enjuiciamiento de la acción u omisión. Es decir, habría que estar a las circunstancias que concurren en cada

caso concreto para analizar si estamos o no en presencia de una conducta ilegal. En este sentido, y dentro de esta limitación general, pueden proponerse casos más concretos en donde parece que el secreto poseería una fuerza menor.

El primero de los límites que habría que considerar se proyectaría en los derechos fundamentales. En este sentido, el secreto profesional encontraría sus límites en los derechos fundamentales. Así, cuando concurra el secreto con un derecho fundamental, habrá que estar al caso concreto pudiéndose limitar su significado. En esta tarea de ponderación de los bienes en juego conviene retener la importancia del bien jurídico que está detrás del secreto, esto es, la libertad de información. Como se observará, en este caso se trata de límites no necesarios sino que tienen que contemplarse en cada caso concreto. Sólo se podrán imponer aquellos límites que resulten estrictamente necesarios para garantizar otros derechos fundamentales. Este tipo de límites es encuadrable dentro de lo que puede ser denominado como límites externos. En ellos se encuadran también los señalados por el artículo 20 de la Constitución.

Otros límites estarían relacionados con el criterio general del encubrimiento de conductas ilegales y permitirían ser analizados con los anteriores. Por ejemplo, podría pensarse que si alguien ataca a la intimidad de otro utilizando algún medio por el que obtiene cierta información y se la da a un profesional de la información, éste no podrá alegar el secreto porque estaría encubriendo un delito (art. 17 del Código Penal). Básicamente, lo que estaría latente, en el caso de que se considerase que se ha transgredido el derecho a la intimidad, sería el mayor valor dado a un bien respecto a otro. Es decir, aquí el problema se traslada a la ponderación de los bienes que están detrás de la figura del secreto y del derecho a la intimidad. Sin embargo, con carácter general, puede afirmarse que el profesional de la información no puede favorecer las conductas ilegales y esto precisamente por el papel que ocupa. Ahora bien, hay que resaltar que el secreto no operaría cuando la fuente fuese imprescindible para la resolución del problema. Incluso, existirán ocasiones en los que el bien protegido por la figura en cuestión se sitúe por encima del que está detrás de la determinación de la ilegalidad. En estos casos, el secreto profesional sería operativo, si bien su titularidad podría incurrir en otro tipo de responsabilidades.

No obstante lo anterior, pueden señalarse ocasiones en las que de ninguna manera estaría justificado el secreto profesional. Es decir, igual que cabe hablar de bienes y derechos que, en el caso de enfrentamiento con el secreto

profesional, deberá ponderarse si deben o no prevalecer, hay otros casos y supuestos en los que no cabe esgrimir esta figura. Estos últimos son los que pueden denominarse como límites internos. No se trata ciertamente de límites sino de situaciones en las que no es posible proyectar el ámbito de validez del secreto.

Así, el secreto profesional no es esgrimible o no existe como obligación jurídica ni como derecho en relación con los delitos enumerados en el artículo 338 bis del Código Penal, es decir, delitos contra la vida, integridad física, libertad sexual, libertad o seguridad de las personas. Se trata de bienes que se sitúan muy por encima y frente a los cuales no puede justificarse.

La figura del secreto tampoco existiría en aquellos casos en los que el profesional de la información difundiese (total o parcialmente) una materia calificada como secreto de acuerdo con la legislación vigente. En estos casos, el profesional no sería ya un testigo sino incluso autor, por lo que el ámbito del secreto no se proyectaría en el hecho. Por otro lado, parece que la posible colisión de los bienes en cuestión debe resolverse en favor de aquello que se presenta como más objetivo, esto es, la materia calificada como secreto. Otra cosa será la crítica de la regulación de los secretos, tema éste que excede del propósito de este análisis.

Idéntica conclusión se obtiene respecto a las informaciones que afectan a la seguridad exterior del Estado o que ataquen a la propia subsistencia del Estado democrático. Estaríamos aquí en presencia de delitos concretos que necesariamente hacen que el secreto decaiga frente a otros valores y bienes.

Respecto a los límites internos que acabamos de señalar, la inexistencia del secreto profesional se producirá siempre que no existan otros medios para la resolución de los delitos a los que nos hemos referido.

Por último, dentro de estos límites internos cabe afirmar que tampoco podrá invocarse el secreto para amparar al autor de un delito que se va a cometer o que se está cometiendo. Ciertamente estamos ante un problema similar al que se nos presentaba dentro de los límites externos. De esta manera será tarea del Juez o Tribunal determinar cuándo debe prevalecer y cuándo no. Pero de forma especial, y como límite interno, el secreto decae frente a la obligación de impedir la comisión de un delito de los previstos en el artículo 338 bis del Código Penal. En este sentido, este artículo señala la obligación de intervenir o de poner en conocimiento de la autoridad la realización de un delito contra la vida, integridad física, libertad sexual, libertad o seguridad de las personas. Ahora bien, igual que ocurría en relación a los otros límites enumerados, el secreto decaerá cuando realmente esté en

juego que se pueda conocer (sólo de ese modo y en ese momento), los datos de la comisión futura o inminente de delitos que se pueden impedir. Es decir, cuando sea constatable, de forma objetiva, un peligro inminente de una acción delictiva.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV.: "El secreto profesional de los periodistas (Debate con Juan Luis Cebrián)", *Cuadernos y Debates*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.
- AA.VV.: *Poder Judicial*, número especial XIII.
- ASIS ROIG, R.: *Deberes y Obligaciones en la Constitución*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991.
- BAÑO LEON, J. M.: "La distinción entre derecho fundamental y garantía institucional en la Constitución española", *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 24, 1984.
- CARRILLO, M.: *La Cláusula de Conciencia y el Secreto Profesional de los Periodistas*, Madrid, 1993.
- DESANTES, J. M.: "La cláusula de conciencia desde la perspectiva profesional", *Persona y Derecho*, vol. II, Universidad de Navarra, 1977.
- FERNANDEZ-MIRANDA, A.: *El secreto profesional de los informadores*, Tecnos, Madrid, 1990.
- GOMEZ-REINO, E.: "El secreto profesional de los periodistas", *Revista de Administración Pública*, núms. 100-102, 1983.
- HOHFELD, W. N.: *Conceptos jurídicos fundamentales*, trad. de G. R. Carrió, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1968.
- OCTAVIO DE TOLEDO, E.: "Algunas reflexiones sobre el tratamiento jurídico del secreto profesional", *La Ley*, núm. 612, febrero de 1983.
- PRIETO SANCHIS, L.: *Estudios sobre derechos fundamentales*, Debate, Madrid, 1990.
- QUADRA SALCEDO, T. de la: "La cláusula de conciencia: un Godot Constitucional", I y II, *Revista Española de Derecho Constitucional*, núms. 22 y 23, 1988.
- RIGO VALBONA, J.: *El secreto profesional de los periodistas*, Bosch, Barcelona, 1988.

